



Poder Judicial de la Nación
CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
- SALA IV -

Exp. N° CAF 49121/2018/CA1, “BANCO DE VALORES SA C/ EN-AFIP S/ DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA”.

En Buenos Aires, a de julio de 2023, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala IV de esta Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a efectos de conocer los recursos interpuestos en los autos “**BANCO DE VALORES SA C/ EN-AFIP S/ DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA**”, contra la sentencia del 21/12/2022, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El señor juez de Cámara Marcelo Daniel Duffy dijo:

1º) Que, por sentencia del 21/12/2022, el *a quo* **rechazó la demanda** promovida por Banco de Valores S.A. contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (en adelante, “AFIP”) confirmando, en consecuencia, la resolución 14/2018 DV REGN. Asimismo, distribuyó las costas en el orden causado (art. 68, segunda parte, CPCCN).

Para resolver de tal modo, recordó que la acción tenía por objeto dejar sin efecto la resolución de la AFIP que había rechazado la repetición iniciada por la actora por **\$13.650.000**, ingresados en exceso en el Impuesto a las Ganancias, por no haber deducido del balance fiscal del ejercicio 2014 las multas aplicadas por el Banco Central de la República Argentina (en adelante, el “BCRA”).

Tras enunciar las defensas opuestas por las partes, el magistrado explicó que la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA, mediante la resolución n° 686/2014, había impuesto una multa de \$82.300.000 a la actora y otra de \$79.390.000 a sus directivos, ante el incumplimiento de las normas de prevención de lavado de dinero mediando legajos incompletos y falta de conocimiento del cliente durante el período comprendido entre el 17/1/2008 y el 30/6/2008. Frente a ello, los sancionados habían deducido recurso directo, que fue resuelto por la Sala I de este Fuero rechazando todos los planteos salvo el vinculado con la cuantía de la sanción. El tribunal sostuvo, a tal efecto, que los montos de las multas no estaban justificados, por lo que ordenó al BCRA que los determinase nuevamente.

A continuación, el juez de grado señaló que, en abril de 2016, el banco había iniciado la acción de repetición objeto de autos por **\$58.006.359,17**, con más sus intereses, monto que luego había sido reducido a **\$13.650.000**, como consecuencia del



dictado de la resolución 611/17 del BCRA, originada en la sentencia de la Sala I *supra* citada.

Agregó que, el 30/5/2018, el Organismo Recaudador había emitido la resolución cuestionada en autos por medio de la cual había tenido por desistida parcialmente a la accionante del reclamo administrativo, y resuelto no hacer lugar a la repetición. En este punto, el *a quo* reseñó los argumentos utilizados por la AFIP para fundar el rechazo y los antecedentes administrativos vinculados con esa decisión.

A continuación, puso de relieve que, en el ejercicio fiscal sujeto a repetición, la ley del gravamen únicamente impedía la deducción de multas “fiscales”, y que sanciones como las analizadas se encontraban reguladas en comunicaciones o circulares. En este escenario, destacó que de la comunicación “A” 5689 del BCRA, citada por la actora para fundar su postura, no surgía expresamente la posibilidad de deducir del impuesto de marras sanciones de aquella entidad, y que tampoco podía interpretarse que lo fueran por el hecho de ser “previsionadas” en el pasivo y calificadas como “pérdidas diversas” en el resultado.

Asimismo, refirió que el concepto de “gasto necesario” era relativo y que debía apreciarse en función de la finalidad de las erogaciones. Advirtió que no se hallaba acreditado que las operaciones que habían originado las multas hubieran sido determinantes o necesarias para la subsistencia de la sociedad. Agregó que las obligaciones regulatorias impuestas por el BCRA no formaban parte del objeto de la actora —“contribuir al desarrollo del mercado de capitales argentino”—, y que no se había demostrado el vínculo entre la multa y esa actividad.

Por su parte, explicó que los gastos “deducibles” eran aquéllos efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por el impuesto, y que para que una erogación lo fuera debía poseer la aptitud de servir al propósito de obtener una renta alcanzada por la gabela, es decir, que estuviese destinada a lograr la ganancia o mantener y conservar su fuente. En ese orden de ideas, puntualizó que no se había comprobado un vínculo teleológico entre el gasto erogado para el pago de la multa y el objeto del banco, por lo que no correspondía su deducción y, consecuentemente, la repetición objeto de autos.

Por último, con relación a los gastos causídicos, advirtió que en las actuaciones administrativas la AFIP había destacado la ausencia de “*antecedentes definitivos aplicables al caso particular, generándose razonables dudas sobre la viabilidad y aceptación del criterio*”; y recordó que, recién a partir de la modificación introducida al art. 83 del decreto reglamentario de la ley de Impuesto a las Ganancias (en adelante, el “DRLIG”) mediante el decreto 1170/2018, se había impuesto un criterio expreso respecto de la cuestión en debate. Ello así, concluyó que las costas debían distribuirse en el orden





Poder Judicial de la Nación
CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
- SALA IV -

Exp. N° CAF 49121/2018/CA1, “BANCO DE VALORES SA C/ EN-AFIP S/ DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA”.

causado en función de la complejidad de las normas en estudio y que la parte actora pudo haberse creído con derecho a debatir.

2º) Que, disconforme con ese pronunciamiento, la **actora** interpuso recurso de apelación el 22/12/2022 y la **AFIP** hizo lo propio el 29/12/2022, que fueron concedidos libremente el 26/12/2022 y el 1º/2/2023, respectivamente.

Puestos los autos en la Oficina, la accionante expresó sus agravios el 23/2/2023, que fueron contestados por su contraria el 14/3/2023.

Por su parte, la AFIP expresó sus agravios el 17/2/2023, que fueron replicados por la actora el 8/3/2023.

3º) Que, **Banco de Valores S.A.** sostiene que la sentencia se apartó de la correcta interpretación de la normativa vigente y realizó una errada apreciación de los hechos al confrontarlos con los principios que rigen la materia tributaria y el Impuesto a las Ganancias.

Para ello, en primer lugar, explica que la multa se impuso por hechos acaecidos durante el curso normal y habitual de sus operaciones, llevadas a cabo conforme a sus estatutos y dentro del marco de la autorización dispuesta por el BCRA y sujetas al riesgo empresario propio de la actividad, no exenta de posibles imperfecciones, en el caso, de naturaleza estrictamente formal. En dicho contexto, sostiene que resultan deducibles para la determinación del gravamen al tratarse de gastos o erogaciones necesarias para obtener las ganancias gravadas y para “mantener y conservar” la fuente productora de réditos.

A continuación, refiere que el *a quo* incurrió en una contradicción en torno a la vigencia temporal de las leyes. Explica que, por un lado, sostuvo que al cierre del ejercicio fiscal bajo estudio la única norma que regulaba la deducción de multas era el art. 145 del DRLIG, que se circunscribía a las de naturaleza “fiscal”, y luego, en el considerando XII, justificó su decisión mediante la nueva redacción del art. 145, modificado por el decreto 1170/2018 (actualmente art. 227 del DRLIG), que *no estaba vigente* en el ejercicio 2014. En esta línea, destaca que durante el mencionado período sólo hubo claridad en cuanto a que las multas *fiscales* no eran deducibles.

Manifiesta que las disposiciones de la Comunicación “A” 5689 del BCRA que utilizó el *a quo* (v.g., “no surge expresamente que las previsiones allí dispuestas están exentas del pago del impuesto a las ganancias”) nada aportaban a la solución del conflicto pues, al tratarse de una disposición del BCRA —reglamentaria de las actividades financieras—, no podía legalmente inmiscuirse en cuestiones impositivas, lo



que supondría la invasión de esferas reservadas a otro poder del Estado, convirtiendo a dicha regulación en inconstitucional. Aclara que la invocación de la Comunicación “A” 5689 como fundamento de la repetición no apuntaba a presumir que por el solo hecho de calificar contablemente a la multa como “pérdida” ella debía deducirse del impuesto. Explica que dicha mención tuvo como objeto demostrar que la calificación contable asignada a las multas del BCRA resultaba compatible con la naturaleza de gasto *necesario* que disminuía los resultados del ejercicio.

Por otra parte, critica que se haya considerado a ese tipo de sanciones como “pérdidas no deducibles”. Para ello, refiere que la enumeración del art. 88 de la ley del Impuesto a las Ganancias (en adelante, la “LIG”) es taxativa, y que ninguno de sus incisos las incluye con ese carácter (vgr., como concepto “no deducible”); por lo tanto, cabe colegir que el legislador no tuvo intención de limitarlas. A su vez, aduce que el art. 145 del DRLIG, que prohíbe el descuento de las multas de origen fiscal, vulnera el principio rector en materia de deducibilidad de gastos, que exige una *vinculación* con las ganancias gravadas. Además, se contradice con el art. 188 del mismo cuerpo normativo ya que, por un lado, las costas resultan deducibles por constituir erogaciones ordinarias de la actividad del contribuyente pero, por el otro, no se lo permite respecto de las multas de origen fiscal. Agrega que la misma lógica resulta aplicable a las sanciones que no tienen naturaleza fiscal. Por lo tanto, insiste en que ni de la LIG ni del DRLIG surgen disposiciones que impidan el descuento de las multas impuestas por el BCRA a la entidad y a sus funcionarios.

Desde otra perspectiva, se agravia de lo sostenido en la sentencia en cuanto a que las multas de marras no formaban parte del objeto social del banco. Al respecto, señala que ello parecería indicar que las habría abonado “sin causa o justificación”, al no estar prevista su cancelación en su estatuto. Agrega que semejante conclusión equivaldría a sostener que en el objeto social de toda empresa, cualquiera fuese su ramo o actividad, debería incluirse un párrafo que contemplase el pago de multas, otros gastos administrativos, sueldos o impuestos, lo cual resultaría absurdo, ya que aquél está conformado por las actividades que realiza, es decir, el fin para que el que se crea la entidad.

Explica que su objeto social es “contribuir al desarrollo del mercado de capitales” argentino mediante diversas actividades afines. Para ello, debe cumplir con las normas regulatorias del BCRA y, de ser necesario, responder a los riesgos empresarios por su incumplimiento. Sobre tal base, sostiene que esos riesgos —entre los que se encuentran las eventuales sanciones que podría aplicar el BCRA en su rol de ente regulador y de control del sistema bancario— y sus eventuales costos asociados son parte intrínseca del objeto social.





Poder Judicial de la Nación
CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
- SALA IV –

Exp. N° CAF 49121/2018/CA1, “BANCO DE VALORES SA C/ EN-AFIP S/ DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA”.

Menciona el régimen disciplinario del BCRA y manifiesta que *prácticamente toda* la actividad llevada a cabo por un banco es factible de algún tipo de eventual sanción por parte de aquél, por lo que cualquier mínimo desvío de la normativa puede ser pasible de sanción. En este sentido, manifiesta que las multas responden a *contingencias* propias del negocio bancario y tienen una relación directa con la obtención de ganancias, que es lo que requiere la ley del tributo.

Sostiene que la interpretación teleológica de los art. 17 y 80 de la LIG efectuada por el *a quo* parte de un error conceptual al desligar el pago de la multa impuesta por el BCRA de su objeto. Explica que esas sanciones son obligaciones que se originan en el desarrollo de su objeto social, que es la prestación de servicios financieros, y es allí donde —aplicando la interpretación teleológica en forma correcta— puede verificarse que la erogación está destinada a lograr la ganancia o mantener y conservar su fuente. Agrega que el pago de la multa no es una decisión suya sino el cumplimiento de una obligación impuesta por el BCRA que indefectiblemente debe asumir, so pena de una sanción mayor e inclusive la inhabilitación para desarrollar la actividad.

Por otra parte, refiere que se incurre en un error al indicar que el año 2016 es el ejercicio fiscal bajo análisis, cuando el objeto de la repetición se circunscribió al período fiscal 2014.

Por último, sostiene que la sentencia viola el principio de irretroactividad de la ley tributaria al fundar su decisión en una norma con vigencia posterior al período fiscal involucrado (v.g., el último párrafo del art. 145 del DRLIG incorporado por el decreto 1170/2018). Agrega que la mencionada norma es inconstitucional por incorporar una limitación a las deducciones no prevista en la ley del tributo y no hace más que confirmar que con anterioridad a su dictado no existía una prohibición de deducir la multa aquí analizada.

4º) Que, la **AFIP** se agravia del modo en que fueron impuestas las costas. Para ello, explica que la sentencia citó diversa jurisprudencia que avala la decisión de fondo y sostiene que la normativa aplicable al caso no reviste una complejidad que permita apartarse del principio general de la derrota.

5º) Que, a los fines de obtener una acabada comprensión de la cuestión a dilucidar en estos autos, resulta conveniente efectuar una **reseña de los antecedentes administrativos vinculados con la multa impuesta por el BCRA:**

(i) El 29/10/2014 el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA dictó la resolución n° 686 mediante la cual impuso a Banco de



Valores S.A. y a sus directores, miembros del Comité de Prevención de Lavado de Dinero y síndicos titulares (en adelante, los “Directivos”) sendas sanciones de multa en los términos del inc. 3, del art. 41 de la ley 21.526, que ascendieron a **\$82.300.000** y **\$79.390.000**, respectivamente. En dicho acto se informó a los encartados que los importes debían ser depositados en el Banco Central dentro de los 5 días de notificados, bajo apercibimiento del devengamiento de los intereses respectivos desde esa fecha y de su cobro por la vía de ejecución fiscal, de conformidad con lo prescripto en el art. 42 de la ley 21.526 cit. (v. fs. 27/77 de la actuación n° 13298-5581-2016).

La sanción tuvo su origen en el *“incumplimiento de las normas de prevención de lavado de dinero, mediando legajos incompletos y falta de conocimiento del cliente, en transgresión a lo dispuesto por la Comunicación A 4459 _RUNOR 1-766, Anexo, Sección 1, puntos 1.1.3, 1.1.4, 1.3.4.2 y 1.6.2.1”* (v. consid. I de la sentencia de Sala I de esta Excma. Cámara, del 6/9/2016, p. 103 de la actuación n° 13298-5581-2016). La autoridad de superintendencia sostuvo que Banco de Valores S.A. no había dado adecuado cumplimiento a los recaudos mínimos requeridos por la normativa aplicable en materia de prevención de lavado de dinero y otras actividades ilícitas, tendientes a esclarecer y justificar el origen de los fondos comprometidos, al haberse detectado una significativa cantidad de transferencias al exterior, cursadas por distintos titulares, cuyos montos, en la mayoría de los casos, habían superado varias veces el patrimonio e ingresos informados por aquéllos en sus declaraciones juradas impositivas (v. fs. 274/28 de la actuación n° 13298-5581-2016).

(ii) Contra dicha resolución se interpuso recurso directo ante el Fuero junto con una medida cautelar, a fin de que se suspendieran sus efectos ejecutorios (v. fs. 98 de la actuación n° 13298-5581-2016).

(iii) El 3/9/2015, la Sala I *desestimó la medida cautelar solicitada*, por lo que el 7/9/2015 se reunió el directorio de Banco de Valores S.A. y decidió, en el marco de la indemnidad acordada a sus directores, síndicos y gerentes ante ese tipo de sanciones, *disponer el inmediato pago de las multas y sus intereses* (v. fs. 98/99 de la actuación n° 13298-5581-2016).

(iv) El 6/9/2016, la Sala I hizo parcialmente lugar al recurso interpuesto por la entidad bancaria, confirmó las multas pero ordenó la devolución de las actuaciones al BCRA para que determinara nuevamente su cuantía (cfr. fs. 103/128 de la actuación n° 13298-5581-2016).

En este sentido, ese tribunal advirtió que el principal reproche del BCRA había sido que, *“Banco de Valores facilitó su estructura para que se realizaran numerosas operaciones de compraventa de títulos públicos por montos significativos sin tomar los recaudos mínimos de prevención en materia de lavado de dinero, en lo que se*





Poder Judicial de la Nación
CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
- SALA IV -

Exp. N° CAF 49121/2018/CA1, “BANCO DE VALORES SA C/ EN-AFIP S/ DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA”.

refiere al “conocimiento de cliente” y al “monitoreo de las operaciones”, a fin de examinar si el movimiento de las cuentas guardaba una “razonable relación” con la actividad declarada por los clientes y detectar si éstos operaban por terceros desconocidos” (v. cons. IX de la sentencia de Sala I, del 6/9/2016, p. 114 de la actuación n° 13298-5581-2016). Asimismo, destacó que la controversia no radicaba en la efectiva realización de las operaciones sino en el hecho que la entidad bancaria no contaba, al momento de la inspección, con información suficiente que permitiera despejar de toda duda la actuación por cuenta propia de los clientes, mediante el adecuado conocimiento de éstos últimos y el monitoreo de sus operaciones (v. cons. XIII de la sentencia de Sala I del 6/9/2016, p. 118/121 de la actuación n° 13298-5581-2016).

6°) Que, por su parte, en el marco de las actuaciones tramitadas ante la AFIP, cabe destacar que:

*(i) El 7/4/2016, la actora inició una acción de repetición en relación al impuesto a las ganancias abonado en exceso en el período fiscal 2014 por un importe de **\$58.006.359,17**. La contribuyente sostuvo que el saldo a favor se generó ante la falta de deducción de las multas aplicadas por el BCRA y los intereses devengados sobre ellas (v. p. 1/20 de la actuación n° 13298-5581-2016).*

*(ii) El 8/9/2017, la actora desistió parcialmente de la acción de repetición, que quedó reducida en su monto a **\$13.650.000**. Ello así, toda vez que, mediante la resolución n° 611/17, la Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA *redujo* la multa aplicada al banco a **\$13.500.000** y a sus Directivos a **\$25.500.000** — *es decir, un total de \$39.000.000*— lo que equivalía a una disminución del saldo a favor en el Impuesto a las Ganancias por el ejercicio 2014 de \$13.650.000 (v. fs. 129 y 210/211 de la actuación n° 13298-5581-2016).*

*(iii) El 30/5/18, la AFIP dictó la **resolución n° 14/2018 (DV REGN)** por la que *no hizo lugar al reclamo de repetición* (v. fs. 215/234 de la actuación n° 13298-5581-2016). Consecuentemente, el 26/6/2018 la actora promovió acción contencioso administrativa (v. fs. 2/25).*

7°) Que, en razón de todo lo expuesto, el *thema decidendum* se ciñe a resolver si corresponde hacer lugar a la repetición de **\$13.650.000 del Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2014, solicitada por la actora, lo cual, a su vez, impone dilucidar si es viable deducir, como “gasto”, las multas que el BCRA impuso a aquélla y a sus directivos, a los fines del cálculo de ese tributo.**



8º) Que, previo a expedirse acerca de la procedencia de la apelación efectuada, resulta conveniente analizar las normas aplicables en materia de gastos deducibles en el Impuesto a las Ganancias *vigentes en el período fiscal objeto de repetición*.

La regla general para la deducción de los gastos está contenida en los **artículos 17 y 80 de la ley del tributo**. En efecto, el artículo 17 dispone: “*Para establecer la ganancia neta se restarán de la ganancia bruta los **gastos necesarios para obtenerla o en su caso, mantener y conservar la fuente**, cuya deducción admita esta ley, en la forma que la misma disponga*”. Por su parte, el artículo 80 establece: “*Los gastos cuya deducción admite esta ley, con las restricciones expresas contenidas en la misma son los efectuados para **obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por este impuesto y se restarán de las ganancias producidas por la fuente que las origina***” (énfasis agregado).

Por otro lado, el artículo 81 enumera una serie de conceptos deducibles con carácter general y el artículo 82 lo hace respecto de las deducciones especiales que se admitirán sobre las cuatro categorías de ganancias, con las limitaciones previstas en la ley. Los artículos 85, 86 y 87 especifican cuáles son las deducciones especiales admitidas para la primera, segunda y tercera categoría, respectivamente, y el artículo 88 detalla en forma expresa una serie de gastos cuya deducción no será permitida, cualquiera sea la categoría de que se trate.

Así, pues, del juego armónico de todas estas disposiciones legales y de las reglamentarias dictadas en su consecuencia se desprende que, cuando los gastos hayan sido realizados con el propósito de mantener y conservar la fuente u obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas y en tanto no se verifique alguno de los casos no admitidos por el artículo 88, la deducción de tales gastos es procedente en todas las categorías por responder a la idiosincrasia del impuesto a la renta neta, sin que el organismo recaudador se encuentre autorizado a trabar el cómputo so pretexto de no compartir el criterio de necesidad o de pertinencia del gasto, asignado por el contribuyente (esta Sala, *in re* “Gelblung Samuel (TF 22676-I) c/DGI”, sent. del 14/02/12).

A ello cabe añadir que el control a cargo del organismo recaudador no puede ir tan lejos como para determinar la inutilidad del gasto o la exageración de su monto para la producción de la ganancia juzgando discrecionalmente la buena administración de la empresa de que se trata. En otros términos, el Fisco puede controlar los gastos por su función productiva, para aceptar o no su existencia y su magnitud en relación con la ganancia bruta, pero no puede censurar los gastos, sustituyendo la decisión empresarial y sus motivaciones por el criterio administrativo de conveniencia y oportunidad (cfr. Dino Jarach, “Impuesto a las Ganancias”, Ed. Cangallo, 1980, p. 73).





Poder Judicial de la Nación
CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
- SALA IV –

Exp. N° CAF 49121/2018/CA1, “BANCO DE VALORES SA C/ EN-AFIP S/ DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA”.

Por tal motivo, la deducción de los gastos necesarios para obtener la ganancia o para mantener y conservar la fuente no exige otro recaudo que *la comprobación, de orden teleológico, de esa concreta finalidad*, esto es, que la erogación esté destinada a lograr una ganancia o a mantener y conservar la fuente de ésta última (cfr. Dino Jarach, “Finanzas Públicas y Derecho Tributario”, Abeledo Perrot, 1996, p. 552).

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al resolver la causa P.868.XLVIII. “Pan American Energy LLC Sucursal Argentina (TF 28823-I) c/ DGI” (sentencia del 26/08/14), sostuvo que el gasto puede considerarse vinculado al giro del negocio de la sociedad, en la medida en que resulta una herramienta utilizada para lograr una mayor eficiencia en el cumplimiento de su objeto social (cfr. art. 87, inc. a, LIG). Asimismo, recordó que “*en el caso de Fallos: 304:661 la Corte afirmó, refiriéndose a la actual ley del impuesto a las ganancias —ley 20.628— que ella ‘...no mantuvo un criterio riguroso —particularmente en las ganancias de la 3a categoría— en cuanto al carácter ‘necesario’ de los gastos, como ocurría con la ley 11.682, sino a través de la finalidad económica de los mismos’*” (consid. 6°).

Así, para que un gasto resulte deducible deberá: **(i)** tener vinculación con la fuente generadora de renta; **(ii)** tener como finalidad la obtención de renta, o el mantenimiento o conservación de su fuente; y **(iii)** ser necesario para tales fines. Como se explicó *supra*, en relación a éstos últimos, la LIG no mantuvo un criterio riguroso en cuanto al carácter “*necesario*” del gasto, como ocurría con la ley de impuesto a los réditos, sino a través —justamente— de su finalidad económica (cfr. *Fallos* 304:661 considerando 7°, último párrafo).

9°) Que, como derivación de lo apuntado, corresponde evaluar la posibilidad de **deducir la multa impuesta a Banco de Valores S.A. a los fines del cálculo del impuesto.**

En primer lugar, debe advertirse que sanciones como la involucrada en el *sub lite* (aplicadas por el BCRA) *no se encuentran enumeradas* en los art. 81, 82 y 87 como deducciones específicamente admitidas. Tampoco figuran en el listado de gastos cuya deducción no está permitida, según lo estatuido en el art. 88, LIG. Por lo tanto, la cuestión debe ser resuelta a la luz de la regla general que contienen los artículos 17 y 80 de la ley del tributo.

Para ello, cabe recordar que la actora desarrolla, “*actividades orientadas al Mercado de Capitales, la Banca de Inversión y la Banca Comercial*”; y que tiene como “*objetivo fundacional contribuir al desarrollo del Mercado de Capitales*

argentino y es por ello que ha asumido un rol protagónico en la estructuración y colocación de títulos valores, asumiendo la posición de líder en productos de inversión colectiva” (cfr. fs. 3vta./4). De lo transcripto se desprende que esas actividades forman parte de la fuente productora de ganancias.

Ahora bien, la accionante aduce que, “*las sanciones fueron aplicadas al Banco y a sus funcionarios por hechos acaecidos durante el curso normal y habitual de las operaciones que el Banco lleva a cabo conforme sus estatutos y dentro del marco de la autorización dispuesta por el propio BCRA*” (v. fs. 7vta.); y que “*las situaciones que han dado lugar a la instrucción del sumario por parte del BCRA y a la aplicación de las multas previstas en el art. 41 de la ley 21.526 al Banco y a sus funcionarios se inscriben y **tienen por causa el despliegue de la actividad normal y habitual por parte de él***” (v. fs. 8, énfasis añadido).

Sin embargo, la multa que se impuso a la entidad financiera no tuvo su causa y origen en una actividad “normal y habitual” del banco (que se supone, de más está decirlo, “*lícita*”), sino —y por el contrario— en un accionar anómalo: el incumplimiento injustificado de normas específicas a que aquél estaba sometido: en el caso, sobre prevención de lavado de activos.

En otros términos, el hecho que dio lugar a la sanción (vgr., al “gasto”) cuya deducción se persigue —“*legajos incompletos y falta de conocimiento del cliente*”— configuró un proceder no sólo no tolerado sino considerado irregular y expresamente amonestado por la autoridad de control, el cual, justamente por tal motivo, no podría estimárselo “propio” de la actividad (*necesariamente legítima*) generadora de rentas, que fue la prevista en el objeto social de la empresa. Sostener otra cosa, como hizo la actora —esto es, que la acción que censuró el BCRA resultó “*inherente al giro del negocio*”—, implicaría tanto como admitir que el negocio/objeto de la empresa comprendía prácticas desaprensivas, negligentes o, incluso, contrarias a derecho; lo cual, además de trasuntar una incongruencia axiológica o, aun, *ius* filosófica, constituiría hasta un absurdo jurídico, considerando especialmente el “deber-ser” que comporta toda conducta normativamente reglada (arg. arts. 944, 953, 1044, 1045 y 1066 Cód. Civ.; arts. 258, 259, 279, 386 y cc. Cód. Civ. Com.; y arts. 18 y 19, ley 19.550. Asimismo, cfr. Nino, Carlos Santiago. “Introducción al análisis del derecho”. Editorial Astrea. Bs. As. 1987, pág 3 y ss., entre otros); máxime, cuando la legislación nacional ha vedado, tradicionalmente y como regla general, el ejercicio abusivo de los derechos (cfr. art. 1071, segundo párrafo, Cód. Civ., y art. 10, Cód. Civ. Com.). A similar conclusión cabría arribar si se alegara que la erogación se llevó a cabo para “mantener” la fuente productora de ganancias.

Desde otra perspectiva, la actora aduce que las sanciones disciplinarias impuestas por el BCRA formaron parte del “*riesgo empresario*” de los bancos. Más allá de





Poder Judicial de la Nación
CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
- SALA IV -

Exp. N° CAF 49121/2018/CA1, “BANCO DE VALORES SA C/ EN-AFIP S/ DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA”.

no advertirse cómo o en qué medida el cumplimiento estricto de la ley constituiría un “riesgo” de tales características, el argumento tampoco puede prosperar, toda vez que ello equivaldría a asumir que las infracciones (y el proceder irregular que les da lugar) *son propias de la actividad bancaria y que su imposición es meramente aleatoria*, poniendo en igualdad de condiciones a todas las entidades financieras independientemente de si su accionar resulta o no conforme a derecho.

Además, la recurrente sostiene en su memorial que, *“de ninguna manera, en el caso que nos ocupa —donde las multas se originaron en una **cuestión interpretativa del alcance de la norma** del BCRA— puede llegar a suponerse que se trataba de operaciones o maniobras al margen de los límites impuestos por el BCRA y que el Banco hubiese asumido el riesgo de ser sancionado por su propia decisión (y el costo que ello acarrearía”*; y que *“el Banco actuó según el criterio interpretativo que consideró correcto y no asumió ningún riesgo como pretende la sentencia”* (v. p. 11 y 17/18 de la presentación del 23/2/2023, énfasis añadido). Al respecto, resulta incongruente sostener que las sanciones del BCRA constituyen un “*riesgo propio*” de la actividad bancaria para, luego, afirmar —sin solución de continuidad— que Banco de Valores S.A. *no asumió* tales contingencias.

Finalmente, cabe señalar, como sostuvo la Sala I en su sentencia del 6/9/2016, que *“la actividad bancaria tiene una naturaleza peculiar que la diferencia de otras con esencia comercial que se caracteriza, especialmente, por la necesidad de ajustarse a las disposiciones y el control del BCRA, hallándose sometida a un régimen jurídico que establece un margen de actuación particularmente limitado que faculta al ente rector del sistema a dictar normas que aseguren el mantenimiento de un adecuado grado de solvencia y liquidez de los intermediarios financieros y a establecer obligaciones a las que deberán ajustarse en relación a aspectos vinculados con su funcionamiento (Fallos 319:2658) (...)”*. En este sentido, no resultaría lógico sostener que el incumplimiento de dichas disposiciones forma parte del “*riesgo empresario*” del banco cuando, como ha sostenido la Corte federal, la actividad desarrollada por el contribuyente, por sus particularidades, debe ajustarse a las disposiciones del BCRA, y se halla *“sometida a un régimen jurídico que establece un margen de actuación particularmente limitado”*.

Por su parte, este Tribunal entiende que, contrariamente a lo sostenido por la actora en su expresión de agravios, el incumplimiento a las normas de prevención en materia de lavado de dinero no se limitó a una *“cuestión interpretativa del alcance de la norma del BCRA”* (v. p. 13 y 17 de la expresión de agravios). En efecto, la Sala I al



confirmar la sanción refirió que: (i) *“el núcleo de la imputación no resulta desvirtuado mediante los planteos de los recurrentes que, en general, remiten a cuestiones tangenciales o insustanciales”* (v. consid. IX de la sentencia del 6/9/2016 obrante a fs. 114 de la actuación n° 13298-5581-2016); (ii) *“la circunstancia detectada por la inspección (operaciones de una magnitud que no se condice con la situación patrimonial de los clientes) refleja, sin lugar a dudas, una incongruencia e incoherencia que subsume las operaciones bajo análisis en un supuesto del punto 1.6.2.1”* (v. consid. XIV de la sentencia del 6/9/2016 cit., obrante a fs. 120 de la actuación n° 13298-5581-2016), y que (iii) *“Claramente, el Banco de Valores debió haber considerado sospechosas las operaciones realizadas por estos clientes, al margen de la consideración puntual de la documentación obrante en cada legajo. Y aquí cabe destacar, que ante la circunstancia de que las operaciones analizadas —individual, mensual o globalmente consideradas, por cliente— se hubieran realizado por montos superiores a la capacidad económica y financiera declarada por los clientes y obrantes en sus legajos, el Banco de Valores debió haber y verificado la real actuación por cuenta propia (con fondos propios) de estos clientes, y tomado las medidas pertinentes, según se describe en la Com. A 4459 (y Res. UIF 228/07, entre otras normas aplicables), con independencia de verificar la operación subyacente”* (v. consid. XIII de la sentencia del 6/9/2016, obrante a fs. 118 de la actuación n° 13298-5581-2016). Ninguna de estas consideraciones efectuadas por la Sala citada y que han quedado firmes y consentidas permiten inferir que la cuestión versó sobre la interpretación de una norma.

Por otra parte, con relación a las alegaciones de la actora respecto a que las multas tuvieron origen en una imperfección de las operaciones de naturaleza estrictamente formal, cabe destacar que la sentencia de la Sala I, al analizar la procedencia de la sanción a los representantes de la sociedad, sostuvo que *“resulta ajustada a derecho la atribución de responsabilidad a las personas físicas a cuyo cargo se encontraban los órganos directivos y de control de la entidad sumariada en el momento de los hechos, teniendo en cuenta que **no se trata de la atribución objetiva, refleja o automática de la responsabilidad** sino del incumplimiento por lo menos culposo de las funciones del directorio, síndicos y del comité (...)*” (v. consid. XVII de la sentencia del 6/9/2016 obrante a fs. 123 de la actuación n° 13298-5581-2016).

Finalmente, y sin perjuicio de lo expuesto, cabe recordar que el art. 377 del CPCCN establece que cada parte soporta la prueba de los hechos a los que atribuye la producción del efecto jurídico que pretende. La actividad probatoria es la encargada de producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos y supone un imperativo del propio interés del litigante quien a su vez puede llegar a obtener una decisión desfavorable en el caso de adoptar una actitud omisiva (Fallos: 318:2555,





Poder Judicial de la Nación
CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
- SALA IV -

Exp. N° CAF 49121/2018/CA1, “BANCO DE VALORES SA C/ EN-AFIP S/ DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA”.

321:1117; 331:881; esta Sala *in re* “Dieguez, Darío Hernán c/ EN-AFIP-DGI s/ proceso de conocimiento”, sentencia del 14/7/2020).

En ese sentido, no puede soslayarse que la actora se limitó a mencionar que la multa se pagó “*so pena de una sanción mayor e inclusive la inhabilitación para desarrollar la actividad*” (v. p. 17 de la expresión de agravios); que “*la erogación de las multas e intereses, atendiendo a su cuantía original cercana a los \$166.000.000 implicaron necesariamente un fortísimo impacto en la estructura patrimonial y restringieron su capacidad disponible de fondos para el desarrollo de sus actividades en forma harto significativa, lo cual permite ver a las claras que la fuente generadora de ganancias gravadas fue modificada y desmerecida en forma significativa por el pago de dichos conceptos*”; y que “*se está ante una actividad financiera claramente afectada y modificada por las características y entidad de la multa aplicada por el BCRA*” (v. fs. 14vta.) sin aportar pruebas que respalden sus afirmaciones. En efecto, no mencionó cuál hubiese sido la “sanción mayor” que podría haber tenido ni las normas pertinentes, tampoco intentó demostrar que el pago de la multa o su incumplimiento podrían haber repercutido en la fuente generadora de rentas o afectado el desarrollo de su objeto.

Por todo lo expuesto, no corresponde hacer lugar a la pretensión de la actora aquí analizada.

10) Que, a continuación, corresponde examinar **la deducibilidad en el Impuesto a las Ganancias de las multas aplicadas a los Directivos** y canceladas por Banco de Valores S.A.

Para ello, cabe mencionar que, mediante el acta n° 1728 del 17/12/10, el directorio de la actora refirió que el BCRA había iniciado el sumario financiero n° 1274 por presunto incumplimiento de las normas de prevención de lavado de dinero en contra de la sociedad y de los Directivos —en la composición vigente a la fecha de los hechos—. En ese escenario, recordó que oportunamente se había contratado un seguro de indemnidad para las mencionadas personas en Chubb Argentina de Seguros S.A., a efectos de cubrir ese tipo de siniestros, y dispuso que, *en el hipotético caso de que aquél no cubriera la totalidad de los gastos y honorarios que insumiere la defensa en el sumario y/o multas que pudieren ser impuestas por el BCRA, la sociedad se haría cargo de su cancelación*, tanto en lo que a ella refiriese como también en lo que correspondiera a los directores, síndicos y funcionarios sumariados (v. fs. 87 de la actuación n° 13298-5581-2016).

Por su parte, el 30/6/2015, en línea con lo resuelto *supra*, el directorio emitió una carta de indemnidad a los directores, miembros de la Comisión Fiscalizadora y

gerentes que estuvieren sumariados o imputados en un sumario financiero, nombrando entre ellos al n° 1274, por cualquier responsabilidad, cargo, acción o proceso iniciado y pendiente de resolución (v. fs. 93/94 de la actuación n° 13298-5581-2016).

El 7/9/2015, frente al rechazo de la medida cautelar solicitada ante este Fuero (reseñado en el cons. 5° *supra*), el directorio del banco ordenó el pago de todas las multas impuestas en el marco del sumario financiero n° 1274 (v. fs. 98/99 de la actuación n° 13298-5581-2016).

En este escenario, cabe destacar —en primer lugar— que no escapa al Tribunal que la Corte federal, en la causa “Pan American Energy LLC Sucursal Argentina” —*sup. cit.*—, tuvo en cuenta la innegable importancia de los recursos humanos en toda organización industrial o comercial, y sostuvo que, “*el gasto puede considerarse vinculado al giro del negocio de la sociedad, en la medida en que resulta una herramienta utilizada para lograr una mayor eficiencia en el cumplimiento de su objeto social*”, para concluir que las erogaciones efectuadas por la actora habían tenido por finalidad la obtención de ganancias y la conservación de la fuente productora de renta “*al tratarse de un incentivo para el correcto y leal cumplimiento de las tareas por parte de los empleados, procurando asegurar su permanencia en la empresa*” (cfr. cons. 8°, énfasis agregado).

Ahora bien, de las constancias obrantes en la causa no surge el criterio de necesidad o de pertinencia del gasto ni el motivo por el cual el pago de la multa a las personas imputadas lograría una ganancia para el banco o el mantenimiento y conservación de su fuente. En efecto y en línea con la jurisprudencia citada, no se especifica de qué manera la indemnidad pudo haber logrado una mayor eficiencia en el cumplimiento de su objeto social, ni que se hubiese dado con el fin de otorgar “*un incentivo para el correcto y leal cumplimiento de las tareas*”; máxime, considerando que fue otorgada *ex post* —es decir, con posterioridad a la generación de los hechos sancionables y para la composición vigente a la fecha de los hechos (v.g., año 2008)—.

Asimismo, tampoco se observa que el dictado de la indemnidad haya puesto a Banco de Valores S.A. al cubierto de eventuales reclamos por parte de las personas sancionadas o si, la falta de dicho compromiso le podría haber traído algún perjuicio en la fuente generadora de rentas.

A fin de fundar su repetición, la actora sostuvo que, “*la protección ante avatares pecuniarios negativos que pudieran sufrir los funcionarios y síndicos del Banco en función de sanciones que pudieran aplicar los organismos de control de las actividades de la entidad forma parte de las condiciones tácitas de contratación de los mismos y es de práctica normal y habitual en el mercado empresarial y también el financiero*” (v. fs. 43). Sin embargo, no acompañó prueba para fundar sus dichos ni presentó documentación que acreditase que el Banco actuó de la misma manera con





Poder Judicial de la Nación
CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
- SALA IV -

Exp. N° CAF 49121/2018/CA1, “BANCO DE VALORES SA C/ EN-AFIP S/ DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA”.

anterioridad, sin que resulte suficiente la respuesta de Chubb Argentina S.A. en cuanto sostuvo que, “*abonó un total \$8.273.291,99 pesos en concepto de indemnización por gastos de defensa incurridos por los Directores y Ejecutivos sumariados por el BCRA bajo el n° de sumario 1274/09*” (v. presentación del 19/5/2022).

Por lo expuesto, no se aprecia en autos el criterio de “necesidad” o de “pertinencia” del pago de las multas a los Directivos, ni su finalidad económica en beneficio de la accionante, circunstancia que sella la suerte adversa de su pretensión.

11) Que, a mayor abundamiento, con relación a la alegada contradicción en torno a la **vigencia temporal de las leyes**, cabe señalar que el *a quo* hizo referencia a la nueva redacción del DRLIG *únicamente* con el objeto de fundar la regulación de las costas en el orden causado, decisión que benefició a la parte actora. Por ende, corresponde desestimar el agravio como así también aquéllos vinculados con el principio de irretroactividad en materia tributaria e inconstitucionalidad del decreto 1170/2018.

Finalmente, cabe desestimar la queja vinculada con la mención efectuada por el *a quo* en relación con las disposiciones de la Comunicación “A” 5689. En efecto, el pronunciamiento no se fundó en esa reglamentación sino que explicó por qué no resultaba aplicable al caso de autos; ello, toda vez que había sido invocada por la actora en su escrito de inicio, situación que luego fue confirmada en su memorial.

12) Que, en cuanto a las **costas**, debe recordarse que el eje rector en la materia es el principio objetivo de la derrota, que implica que ellas se imponen al vencido sin efectuar valoración alguna respecto de su conducta. Esto no quiere decir que la carga en cuestión deba interpretarse como un resarcimiento o una reparación de daños fundada en una atribución o presunción de culpabilidad, sino que a través suyo se persigue que quien se vea constreñido a recurrir a un proceso judicial para salvaguardar un derecho no se encuentre perjudicado al tener que afrontar los desembolsos que implica el funcionamiento de la vía judicial.

Asimismo, en relación con la excepción que faculta la eximición del pago de los gastos causídicos, cabe destacar que la norma acuerda a los magistrados la facultad de interpretarla con un grado de flexibilidad que queda librado a su prudente arbitrio, valorándose en cada caso en particular. Así las cosas, entiendo que la naturaleza de las cuestiones y de los derechos involucrados, y la complejidad técnica que presenta la materia en debate pudieron haber brindado al demandante razones suficientes para creerse



con derecho a promover la presente acción, lo que amerita que los gastos causídicos se distribuyan por su orden (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN).

En función de lo expuesto, **VOTO** por:

1º) Rechazar el recurso interpuesto por la parte actora y en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en los términos y con el alcance dispuesto en los considerandos 8º y 9º *supra*.

2º) Imponer las costas de esta instancia en el orden causado (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN).

Los señores jueces de Cámara Rogelio W. Vincenti y Jorge Eduardo Morán adhirieron al voto precedente.

En virtud del resultado que instruye el acuerdo que antecede, este Tribunal **RESUELVE**:

1º) Rechazar el recurso interpuesto por la parte actora y en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en los términos y con el alcance dispuesto en los considerandos 8º y 9º *supra*.

2º) Imponer las costas de esta instancia en el orden causado (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN).

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

MARCELO DANIEL DUFFY

JORGE EDUARDO MORAN

ROGELIO W. VINCENTI

